

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021)

SENTENCIA 55

2021-00196

Procede el Juzgado a decidir la **ACCIÓN DE TUTELA** instaurada por **CARLOS ALBERTO HIDALGO FLOREZ** en contra de **ASMETSALUD EPS-S** a través de su representante legal, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, integridad personal, vida, mínimo vital, dignidad humana, salud y seguridad social. Tramite constitucional al que se vinculó a la **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE, AVIDANTI S.A.S.**

I. ANTECEDENTES

Informa el accionante que se encuentra afiliado a ASMETSALUD EPS a través del régimen subsidiado.

El pasado 24 de febrero le fue remitido a consulta por la especialidad de otología, la cual fue autorizada y programada para el próximo 22 de abril con el Instituto para niños ciegos y sordos del Valle del Cauca ubicada en la ciudad de Cali.

Afirma no contar con los recursos para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación para asistir a la cita médica, y en virtud a su diagnóstico requiere de la compañía de su esposa.

II. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita se protejan sus derechos fundamentales y se ordene a la accionada

“proceda autorizar la ENTREGA EFECTIVA DE LOS VIÁTICOS DE TRASLADO (traslado Manizales-Cali y viceversa y transporte dentro de la ciudad de destino desde el lugar de alojamiento hasta el INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DE CALI según lo requiera el médico tratante ida y regreso además de GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO) a favor de CARLOS ALBERTO HIDALGO FLOREZ Y UN ACOMPAÑANTE ya que por mi situación no puedo trasladarme solo, para que finalmente pueda acceder al servicio médico de CITA CON ESPECIALISTA EN OTOLOGIA, que requiero por mis diagnósticos y así evitar un PERJUICIO IRREMEDIABLE.”

III. PRUEBAS

Las aportadas por parte de la accionante:

- Cédula de identidad del suscrito.
- Historia Clínica.

IV. TRÁMITE

Mediante auto de fecha 06 de abril de 2021, se admitió la acción de tutela, corriéndole traslado a la entidad accionada por el término de dos días para que se pronunciara sobre el particular, disponiéndose su notificación a través de su correo electrónico. Así mismo, se notificó el auto admisorio al accionante y a las entidades vinculadas, concediéndoles el mismo término de traslado para su pronunciamiento.

Se decretaron las pruebas aportadas por el actor y de oficio se ordenó requerirlo para que brindara una información necesaria para la decisión, así mismo, se exhortó a la especialista que lo remitió a la valoración por otología, a fin de que informara si el paciente necesita del acompañamiento de una persona para asistir a la cita autorizada y programada para la ciudad de Cali.

V. PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES.

AVIDANTI se pronunció frente a las pretensiones de la acción de tutela, precisando que son competencia de la EPS a la cual se encuentra afiliado, razón por la cual piden su desvinculación del trámite.

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS luego de un análisis a las normas aplicables al asunto, concluyó que la responsabilidad de asumir los gastos de transporte y alimentación que pide el accionante a través de este mecanismo, le asiste a la entidad promotora de salud, por lo que solicitan ser desvinculados y en su lugar se ordene a la EPS asumir la atención en salud que le corresponde.

La EPS, el accionante y la IPS vinculada, guardaron silencio frente al particular, pese a estar debidamente notificados como se observa en el expediente.

VI. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a este Juzgado determinar si la conducta asumida por la entidad accionada o la vinculada, vulnera los derechos constitucionales invocados al negar la asunción de transporte para el accionante. Para ello se analizará el derecho a la salud como prerrogativa fundamental y lo relacionado con el suministro de transporte para acceder a los servicios de salud.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede esta Funcionaria Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

VII. CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Este Juzgado la tiene para tramitar y fallar la acción incoada, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en el cual se asigna su conocimiento a todos los Jueces de la República, sin determinar competencia territorial de manera exclusiva, salvo el lugar donde ocurre la vulneración del Derecho.

LEGITIMACIÓN

POR ACTIVA la ostenta la accionante, al invocar la protección constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 2591.

POR PASIVA radica en cabeza de la entidad accionada, de las cuales predica la vulneración de derechos confutados.

DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha abordado el tema del derecho a la salud en muchas oportunidades. En efecto, en algunas providencias se ha pronunciado sobre la noción de calidad de vida. En fallo T-771 de 2002 señaló lo siguiente:

“El ser humano, necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomalías en la salud, aún cuando no tengan carácter de enfermedad, afectan esos niveles, poniendo en peligro la dignidad personal, resulta válido pensar que el paciente tiene derecho, a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus dolencias, a buscar por los medios posibles, la posibilidad de una vida, que no obstante las dolencias pueda llevarse con dignidad.”

En otra oportunidad la guardiana de la constitución manifestó que el derecho a la salud es un derecho fundamental, en tanto que envuelve, como sucede con los demás derechos fundamentales, prestaciones de orden económico orientadas a garantizar de modo efectivo la eficacia de estos derechos en la realidad; por consiguiente, sostiene el alto tribunal, todas las entidades que prestan la atención en salud, deben procurar no sólo de manera formal sino también material la mejor prestación del servicio, en razón a que la salud comporta el goce de distintos derechos, es especial la vida y el de la dignidad, los cuales deben ser garantizados por el Estado Colombiano de conformidad con los mandatos internacionales, constitucionales y jurisprudenciales. Sobre la fundamentalidad de dicha prerrogativa manifestó en sentencia T-016 de enero 22 de 2007:

“De acuerdo con la línea de pensamiento expuesta y que acoge la Sala en la presente sentencia, la fundamentalidad de los derechos no depende –ni puede depender- de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica. Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Significan de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho, no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios –económicos y educativos- indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar... Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción).”

EL CUBRIMIENTO DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA EL PACIENTE Y UN ACOMPAÑANTE. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

TRANSPORTE. Según la Ley 1751 de 2015, artículo 6º, literal c, “(l)os servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la **accesibilidad física**, la asequibilidad económica y el acceso a la información” (Resaltado propio). En concordancia, el transporte y los viáticos requeridos para asistir a los servicios de salud prescritos por los médicos tratantes, si bien no constituyen servicios médicos^[27], lo cierto es que sí constituyen elementos de acceso efectivo en condiciones dignas.

Resulta importante diferenciar entre el transporte intermunicipal (traslado entre municipios) e interurbano (dentro del mismo municipio)^[28]. En relación con lo primero, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 5857 de 2018-“*Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC)*”, el cual busca que “*las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o las entidades que hagan sus veces, garanticen el **acceso** a los servicios y tecnologías en salud bajo las condiciones previstas en esta resolución*” (Resalta la Sala).

Bajo ese entendido, dicha Resolución consagró el Título V sobre “*transporte o traslado de pacientes*”, que en el artículo 120 y 121 establece las circunstancias en las que se debe prestar el servicio de transporte de pacientes por estar incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), con cargo a la UPC. En términos generales “*el servicio de transporte para el caso de pacientes ambulatorios se encuentra incluido en el PBS y debe ser autorizado por la EPS cuando sea necesario que el paciente **se traslade a un municipio distinto al de su residencia (transporte intermunicipal), para acceder a una atención que también se encuentre incluida en el PBS***”^[29] (Resaltado propio).

Siguiendo lo anterior, en principio el paciente únicamente está llamado a costear el servicio de transporte cuando no se encuentre en los eventos señalados en la Resolución 5857 de 2018^[30]. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que cuando el servicio de transporte se requiera con necesidad y no se cumplan dichas hipótesis, los costos de desplazamiento no se pueden erigir como una barrera que impide el acceso a los servicios de salud prescritos por el médico tratante. Por consiguiente, “*es obligación de todas las E.P.S. suministrar el costo del servicio de transporte, cuando **ellas mismas autorizan la práctica de un determinado procedimiento médico en un lugar distinto al de la residencia del paciente, por tratarse de una prestación que se encuentra comprendida en los contenidos del POS***” (Negrilla fuera de texto original).

En consideración a lo anterior se han establecido las siguientes subreglas que implican la obligación de acceder a las solicitudes de transporte intermunicipal, aun cuando no se cumplan los requisitos previstos en la Resolución 5857 de 2018:

i. El servicio fue autorizado directamente por la EPS, remitiendo a un prestador de un municipio distinto de la residencia del paciente^[31].

ii. Ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado.

iii. *De no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.*

En relación con el transporte intramunicipal, esta Corporación ha evidenciado que “*no se encuentran incluidos expresamente en el PBS con cargo a la UPC*”, por consiguiente, cuando el profesional de la salud advierta su necesidad y verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en los anteriores párrafos, deberá tramitarlo a través del procedimiento de recobro correspondiente^[32].

ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO. La Corte Constitucional reconoce que estos elementos, en principio, no constituyen servicios médicos, en concordancia, cuando un usuario es remitido a un lugar distinto al de su residencia para recibir atención médica, los gastos de estadía tienen que ser asumidos por él o por su familia. No obstante, teniendo en consideración que no resulta posible imponer barreras insuperables para asistir a los servicios de salud, excepcionalmente, esta Corporación ha ordenado su financiamiento.

Para ello, se han retomado por analogía las subreglas construidas en relación con el servicio de transporte. Esto es, (i) se debe constatar que ni los pacientes ni su familia cercana cuentan con la capacidad económica suficiente para asumir los costos; (ii) se tiene que evidenciar que negar la solicitud de financiamiento implica un peligro para la vida, la integridad física o el estado de salud del paciente; y, (iii) puntualmente en las solicitudes de *alojamiento*, se debe comprobar que la atención médica en el lugar de remisión exige “*más de un día de duración se cubrirán los gastos de alojamiento*”^[33].

TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA UN ACOMPAÑANTE. En algunas ocasiones el paciente necesita un acompañante para recibir el tratamiento médico. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que las EPS deben costear los gastos de traslado de un acompañante cuando (i) se constate que el usuario es “*totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento*”; (ii) requiere de atención “*permanente*” para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas; y (iii) ni él ni su núcleo familiar tengan la capacidad económica para asumir los costos y financiar su traslado^[34].

FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA. En relación con el requisito consistente en demostrar la carencia de recursos económicos para cubrir los gastos de alimentación, alojamiento y transporte para un acompañante debe precisarse que la ausencia de capacidad financiera puede constatare con los elementos allegados al expediente, cuando el paciente afirme la ausencia de recursos, la carga de la prueba se invierte y le corresponde a la EPS desvirtuar lo dicho^[35] pero, en caso de guardar silencio, la afirmación del paciente se entiende probada^[36] y, puntualmente, respecto de las personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud mediante el Régimen Subsanoado o inscritas en el SISBEN “*hay presunción de incapacidad económica (...) teniendo en cuenta que hacen parte de los sectores más pobres de la población*”^[37].¹

VIII. CASO CONCRETO

¹ Sentencia T 259 de 2019.

El accionante se encuentra afiliado Sistema General de Seguridad Social en Salud por medio del régimen subsidiado a través de la EPS ASMET SALUD, reside en la ciudad de Manizales y debido a que padece de “TINNITUS” fue remitido a la especialidad de otología por parte de su profesional tratante. Este servicio fue autorizado por la entidad promotora de salud para el Instituto Para Niños Ciegos y Sordos Del Valle ubicado en la ciudad de Cali, siendo programado para el día 22 de abril de 2021.

En virtud de lo anterior, el señor Carlos Alberto Hidalgo Flórez pretende sean reconocidos los gastos de transporte intermunicipal e interurbano dentro de la ciudad de Cali, alojamiento y alimentación para él y un acompañante, pues no cuenta con los recursos económicos para asumirlos.

Sobre el particular, la EPS guardó silencio, pese habersele corrido traslado del escrito de tutela y preguntado específicamente si dentro de su red contratada en la ciudad de Manizales cuenta con una IPS que pueda brindar la interconsulta por otología ordenada al accionante.

De otro lado, en uso de las facultades oficiosas esta Juez Constitucional, requirió a la doctora **CHERLY NIRGYRETH ROJAS GARCÍA RM 49715203** especialista en Otorrinolaringología quien remitió al actor a la especialidad de otología, para que indicara si de acuerdo a la patología del paciente, era necesario el acompañamiento de una persona para asistir a la interconsulta autorizada en la ciudad de Cali. Frente al interrogante dicha profesional contestó lo que a continuación se transcribe:

*“El paciente presenta síntomas de acufeno intenso y permanente en oído derecho, con vértigos ocasionales, hipoacusia neurosensorial unilateral, cefaleas frecuentes, además por otras especialidades presenta: disminución de agudeza visual, dolor lumbar crónico axial, artrosis facetario lumbar, hipotiroidismo y enfermedad ácido péptica, **considero que si debe viajar con acompañamiento preferiblemente**”.* (negrillas propias).

Conforme con los elementos fácticos mencionados y el marco jurídico estudiado, procede el Despacho a resolver el problema jurídico planteado.

El derecho fundamental a la salud según la Ley Estatutaria 1751 de 2015, artículo 6º, literal c, se rige, entre otros, por el principio de accesibilidad, el cual implica garantizar al señor Hidalgo Flórez el acceso físico a los servicios de salud prescritos por sus médicos tratantes y autorizados por su EPS en un lugar diferente a su residencia.

Según la Resolución 5857 de 2018, artículo 121, cuando se requiera “*el transporte en un medio diferente a la ambulancia (este) podrá (...) ser autorizado por la EPS cuando se requiera acceder a una atención en salud que **tenga lugar en un municipio distinto a la residencia del paciente***” (Resalta el Juzgado). En el de marras, el accionante tiene que desplazarse desde su lugar de residencia (Manizales) a una ciudad diferente, debido a que la EPS a la que se encuentra afiliado autorizó el servicio a una IPS ubicada en la ciudad de Cali.

Por consiguiente, en aplicación del marco jurídico vigente, la EPS ASMET SALUD tiene obligación de cubrir los gastos que implica dicho desplazamiento, al no encontrarse excluido del PBS aunado que, se encuentran satisfechos los requisitos establecidos

jurisprudencialmente para acceder al servicio de transporte aun cuando no se cumplan los requisitos previstos en la Resolución 5857 de 2018 debido a que:

(i) El servicio fue autorizado directamente por las EPS a la cual se encuentra afiliado el demandante, remitiéndolo a un prestador de un municipio distinto de su residencia.

(ii) Ni el accionante ni su familia cercana cuentan con la capacidad económica para asumir los costos, se encuentra afiliado al SISBEN y, según esta la Alta Corporación Constitucional, respecto de estas personas *“hay presunción de incapacidad económica (...) teniendo en cuenta que hacen parte de los sectores más pobres de la población”* y, adicionalmente, fue afirmada su incapacidad económica, sin que fuera desvirtuada por la EPS.

(iii) De no efectuarse la remisión se pone en riesgo la salud del demandante, habida cuenta el concepto médico emitido por el especialista tratante arriba transcrito, en el que detalló los síntomas padecidos por el actor de los cuales se evidencia su necesaria atención, aunado a que una vez un médico tratante ordena un servicio de salud a su paciente, este considera vital para garantizar el tratamiento y salvaguardar su vida.

Respecto de este último punto debe recordarse que según los principios de integralidad y continuidad (Ley 1751 de 2015, artículo 6º, literal d; y artículo 8º) una vez se haya iniciado la prestación de un servicio, *“este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas”*, al contrario, el tratamiento debe ser prestado de forma *“completa, diligente, oportuna y con calidad”*. Por consiguiente, no resulta posible imponer barreras de acceso al accionante para que pueda acceder a los servicios ordenados por su médico tratante, tal y como sucede cuando se impone asumir los gastos de transporte y los viáticos que exige el desplazamiento, a pesar de que el paciente carece de recursos económicos, llegando al punto de que deban dejar de asistir a sus citas médicas, ocasionando un deterioro en su salud. Igualmente, en relación con este caso se recuerda que la finalidad del diagnóstico consiste en identificar la patología, determinar el tratamiento médico e iniciar el mismo bajo la prescripción médica. Por consiguiente, dificultar el proceso, compromete directamente el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud.²

Así las cosas, se ordenará a la EPS ASMET SALUD de manera inmediata, disponer lo administrativa y presupuestalmente necesario para financiar el **TRANSPORTE INTERMUNICIPAL** que requiera el accionante para asistir a la consulta por la especialidad de otología, autorizada y programada para el día 22 de abril de 2021 en la ciudad de Cali en el Instituto Para Niños Ciegos y Sordos Del Valle, y los que en lo sucesivo sean autorizados en un municipio diferente al de su residencia para el tratamiento de su patología *“tinnitus”*. La financiación de **ALOJAMIENTO**, dependerá de que la atención médica en el lugar de remisión exija más de un día de duración y, respecto a los gastos de **ALIMENTACIÓN**, se cubrirán aquellos que se requieran para la manutención en el municipio donde se reciba la correspondiente atención médica durante el tiempo de la estadía.

En el mismo sentido y con las mismas condiciones antes descritas, se ordenará el suministro de **TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA UN ACOMPAÑANTE**, toda vez que del material probatorio allegado,

² Sentencia T-611 de 2014

específicamente el concepto médico de la especialista tratante, se observa la necesidad y la dependencia del accionante de un tercero.

En lo que respecta al **TRANSPORTE INTERURBANO**, se tiene que:

Actualmente, en el Régimen Subsidiado, cuando el médico tratante prescribe un servicio no incluido en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, y no excluido mediante las listas emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, debe llevarse a cabo el proceso determinado en la Resolución 2438 de 2018 ante la Junta de Profesionales en Salud, en la cual se determinará la aprobación o no de lo prescrito.

Según las consideraciones de esta providencia, el transporte interurbano solicitado por el señor Hidalgo Flórez, no se encuentra cubierto por el PBS con cargo a la UPC, ni tampoco está excluido por las listas del Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, con el material probatorio allegado al expediente no se evidencia la prescripción del médico tratante ni el trámite surtido ante la Junta de Profesionales en Salud, (ni ante el Comité Técnico Científico que se encontraba funcionando cuando se presentó esta acción de tutela) para la autorización correspondiente, por lo tanto, no se concederán.

Por tratarse de una responsabilidad exclusiva de la entidad promotora de salud el brindar una continuidad en la prestación del servicio y garantizar la materialización del mismo, se desvinculará de este trámite a la **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE, AVIDANTI S.A.S.**

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la salud a favor del señor **CARLOS ALBERTO HIDALGO FLOREZ** en contra de **ASMETSALUD EPS-S**.

SEGUNDO: ORDENAR a **ASMETSALUD EPS** de manera inmediata, disponer lo administrativa y presupuestalmente necesario para financiar el **TRANSPORTE INTERMUNICIPAL** que requiera el accionante para asistir a la consulta por la especialidad de otología, autorizada y programada para el día 22 de abril de 2021 en la ciudad de Cali en el Instituto Para Niños Ciegos y Sordos Del Valle, y los que en lo sucesivo sean autorizados en un municipio diferente al de su residencia para el tratamiento de su patología *"tinnitus"*. La financiación de **ALOJAMIENTO**, dependerá de que la atención médica en el lugar de remisión exija más de un día de duración y, respecto a los gastos de **ALIMENTACIÓN**, se cubrirán aquellos que se requieran para la manutención en el municipio donde se reciba la correspondiente atención médica durante el tiempo de la estadía.

En el mismo sentido y con las mismas condiciones antes descritas, se ordenará el suministro de **TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA UN ACOMPAÑANTE.**

TERCERO: NEGAR el suministro de transporte interurbano.

CUARTO: DESVINCULAR a la **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE, AVIDANTI S.A.S.**

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y por el medio más expedito posible.

SEXTO: ENVIAR el expediente a la H. Corte Constitucional, para su revisión, en la oportunidad de Ley (Art. 31 último inciso Decreto 2591 de 1991), en el evento que el presente proveído no sea impugnado dentro del término legal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

JCB

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **46c81a93b0b34fbbb6a409ab790295a5f0f1c4650ec92c5ea5763c1f9330a714**
Documento generado en 14/04/2021 04:38:55 PM